

La inflación lleva a la dictadura

Por Guillermo MEDINA

CUANDO este artículo, primero de una serie sobre la crisis económica y su coincidencia con la transición política, estaba escrito, llegan informaciones sobre una próxima aceleración y ampliación del programa económico del Gobierno. El último Consejo de ministros parece ser la señal de partida de una voluntad política concreta: colocar la economía en el primer puesto de las preocupaciones y actuar con energía y rapidez.

Trasladar esta decisión a la práctica comporta inevitables riesgos. Pero pueden paliarse si el Gobierno explica a la opinión pública —y no sólo a los dirigentes sindicales— la gravedad de la crisis y la necesidad de las medidas antiinflacionistas. Por otra parte, el mayor de los riesgos es la inacción. Una buena parte del país sólo espera ver al Gobierno firme, solidario, claro y activo para recobrar la confianza. El programa de austeridad y reformas (inseparables) en busca de la estabilización (sin eufemismos) y el saneamiento debe llevarse a cabo pese a todos los intereses afectados, y el Gobierno no puede esperar indefinidamente a contar con el visto bueno de todos. Y más cuando hay razones para dudar de la capacidad de pacto y representación de las centrales sindicales, en plena competencia con vistas a las elecciones sindicales.

Al actuar, el Gobierno asume su propia responsabilidad en el éxito o fracaso del programa económico. Para eso están las elecciones en una democracia. Pero no hemos llegado aún a una situación normalizada. No habrá próximas elecciones sin solución de la crisis económica, y la responsabilidad no será sólo del Gobierno, sino también de todos los grupos políticos, económicos y sindicales.

EN diciembre de 1918 un dólar podía cambiarse en la República de Weimar por ocho marcos. Cinco años después, hacían falta cuatro billones de marcos. La estabilidad económica saltó en pedazos, arrastrando tras de sí la joven democracia alemana, que había sustituido, en medio de la esperanza y la expectación, al derrotado Imperio del Kaiser. Los alemanes vieron cómo se cumplía la afirmación de Lenin: «El modo más seguro de destruir una sociedad es destruir su moneda.» Frustración, resentimiento, inseguridad, sucedieron a la descomposición de la sociedad y del Estado democrático. En marzo de 1924, una minoría de parlamentarios encabezados por Adolfo Hitler entraba en el Reichstag para escalar el Poder rápidamente en medio de la indiferencia de unos y el entusiasmo de otros. Los alemanes quedaron galvanizados por quienes les hicieron pasar de la depresión al arrebató y de allí a una guerra espantosa.

FALTA CONCIENCIA DE LA CRISIS

Los ejemplos se suceden a lo largo de la Historia: una democracia privada de una mínima estabilidad económica genera un proceso que conduce a la solución autoritaria. Chile y Argentina están ahí como dramáticas confirmaciones de un principio de validez universal: un régimen dictatorial puede permanecer allí donde se produce una alta inflación, pero ésta es incompatible con la continuidad de un sistema democrático. «Si no se salva la economía, volverá la dictadura», prevenía en marzo pasado Mario Soares a un pueblo al borde del colapso, tras los excesos de la gran fiesta revolucionaria.

Sería suicida desconocer que la inflación nos lleva a la dictadura, que sobre un país en quiebra es muy difícil consolidar una incipiente democracia y que una sociedad sobre la cual se ha instalado una espiral inflacionista es fácil presa —las clases medias como las clases obreras— de la tentación totalitaria. Cuando una nación se instala durante un largo período en una inflación excesiva, consolidando lo que es una anomalía, los instrumentos de un Estado democrático se vuelven insuficientes para volver a la normalidad. Desasosiego, tensiones sociales, paro, empobrecimiento de la gran mayoría, corrupción, desgana, inseguridad, debilitamiento de los resortes morales y éticos de la sociedad, son las secuelas inevitables de una espiral inflacionista que entre nosotros apunta con virulencia preocupante.

En muchas de las inquietudes y tensiones del momento actual se deja ver una causa común: la inflación. Pero lo más preocupante no es ya, con ser tan grave, la inflación, sino la insuficiente conciencia de la sociedad y de los partidos, sobre la naturaleza y el alcance de

la crisis económica y sobre los medios para hacerle frente. No sólo esto, sino que incluso en algunos sectores políticos —no el P.C.E., que entiende la naturaleza del problema y repite la voz de alarma— se acusa al Gobierno de utilizar el fantasma inflacionista para amenazar con el peligro de involución y presionar así sobre sus interlocutores sindicales y políticos. Resulta increíble y preocupante que puedan afirmar esto políticos influyentes en partidos que ocupan cuotas importantes de responsabilidad y de poder políticos.

LA INFLACION, PROBLEMA PRIORITARIO

Mucho más amenazante para el futuro de la democracia es la inflación que el golpe propinado a un diputado por un policía en medio de la excitación de un incidente lamentable. Y mucho más acuciante el problema de los precios que el debate sobre lo que sucedió en el Sahara en noviembre de 1975. Pero el contraste está a la vista. Ahora, un auténtico diluvio de proyectos de ley va a caer sobre las Cortes desde todos los ángulos políticos. Todos estarán justificados y buscarán solución a problemas reales, pero temo que las ramas no nos dejen ver el bosque. Son innumerables los problemas que se han ido acumulando en espera de soluciones democráticas. Nuestro sistema jurídico necesita una amplia revisión. Hay pendiente una reforma de las estructuras económicas. Hay que desarrollar el nuevo cuadro de nuestras relaciones internacionales. La transición no se cierra con la redacción de la Constitución ni se reduce sólo a lo político. Con todo esto surge un doble riesgo: creer que la democracia es la solución de los problemas y no un método para resolverlos en libertad y convivencia, y caer en la impaciencia y el inmediateísmo.

El pacto previo que deben negociar los partidos políticos es el de urgencias y prioridades. Y no dudo al opinar que el primer puesto de la escala de objetivos, al cual habría que condicionar por ahora todo lo demás, ha de ocuparlo, junto a la redacción de la Constitución, la batalla contra la inflación.

Los últimos años del régimen anterior estuvieron ocupados preferentemente por los problemas del orden público y la búsqueda de una supervivencia política imposible. Durante ellos, los responsables políticos renunciaron a hacer frente a la crisis económica con algo más que una política de parcheos, y a la muerte de Franco se generalizó la opinión según la cual sólo podría llevarse a cabo una nueva política económica eficaz en el cuadro político poselectoral. Si la euforia del mito desarrollista dejó sitio a una crisis del modelo económico en coincidencia con el ocaso político del régimen, de aquí se pasó al vacío pre-

electoral, dominado por la busca de una salida democrática.

Pasadas las elecciones, la situación debiera experimentar un giro de 180 grados, para colocar la crisis económica en el eje de la actividad política inmediata. La responsabilidad es de todas las fuerzas políticas, de los empresarios y los sindicatos, y la cuestión no radica tanto en la formación de un Gobierno de concentración como en negociar las soluciones de la crisis. El primer punto de consenso debe ser la necesidad de un modelo de austeridad rigurosa y tajante para todos, por decirlo con palabras del profesor Tierno.

FIRMEZA-AUSTERIDAD-ESPERANZA

No es cuestión de exponer ahora la panoplia de instrumentos y objetivos antiinflacionistas del Gobierno, centrados principalmente en la depreciación de la peseta, la reforma fiscal, la del sistema financiero, la política monetaria y la política de rentas. Instrumentos todos correctos y esenciales, pero requieren una segunda fase de medidas. Si importa resaltar tres aspectos de la batalla contra la inflación, sin los cuales el mejor programa técnico no serviría para mucho. En primer lugar, está la necesidad de afirmar una voluntad política de no ceder a las presiones de los intereses sociales y económicos inevitablemente afectados por la política antiinflacionista. Voluntad de la que no carece, por ejemplo, el profesor Barre, un técnico encargado de combatir la inflación, quien supo ser fiel a su primera advertencia: «No cederé a ninguna presión, ni siquiera electoral.»

El programa de Barre no gustó a casi nadie, porque afectó a casi todos; pero si la izquierda francesa ocupara el Poder en 1978, tendría que desmentir sus afirmaciones desde la oposición e imponer igualmente la austeridad. En Italia, los comunistas están apoyando un programa de estabilización económica y los sindicatos aceptan el control de las alzas salariales como contribución al saneamiento económico, única alternativa a la ruina y la bancarrota. Y en Estados Unidos, el Presidente Carter tiene el coraje de establecer una medida de las que más podrían herir el orgullo de la nación más poderosa: la austeridad energética.

La austeridad es, en efecto, la segunda condición básica. Parte del reconocimiento de una realidad que muchos quieren

desconocer: el país vive y gasta por encima de sus posibilidades y produce por debajo de sus demandas, necesarias o superfluas. Digo esto en términos generales, macroeconómicos, pues es obvio que en la situación española hay sectores a los que aún no ha llegado un suficiente grado de bienestar, y hablarles de austeridad sería una burla. Pero este es el aspecto redistributivo, con independencia del cual existe el principio de que la solución de la crisis requiere austeridad y racionalidad económica. Sin disciplina económica —que ya practican Francia, Gran Bretaña, Italia...— tampoco habrá la ayuda exterior que necesitamos. No existen milagros económicos, no queramos desconocer las realidades: ni nada ni nadie nos libra de un esfuerzo colectivo ni vamos a tener un solo dólar sin paralelo esfuerzo interior.

Todo lo que no sea reconocer que hay un problema de precios, pero también un problema de productividad decreciente, es no salir de la demagogia. Y junto a ello hay que disminuir ciertos gastos de consumo que escapan a las posibilidades actuales de nuestro sistema económico y que han ido extendiéndose entre una parte de la sociedad; es preciso eliminar el desperdicio, los gastos inútiles que redundan en el aumento de los costos de las empresas y en los gastos de la Administración y de las empresas nacionalizadas. Problemas como el absentismo, el crecimiento de la burocracia, las prácticas monopolísticas y proteccionistas, la evasión fiscal, etc., no pueden ser ignorados por una eficaz política antiinflacionista.

El tercer aspecto de la batalla contra la inflación es el psicológico, al que ya diera importancia Keynes. Firmeza, claridad y veracidad deben ser componentes de una política económica cuyo resultado radicaré en buena medida en la capacidad para galvanizar voluntades, movilizar recursos y devolver la confianza. Al fondo del esfuerzo colectivo para eliminar la inflación aparece un desarrollo económico estable y equitativo, una economía de «rostro humano» y la desaparición del obstáculo más grave e inmediato para la consolidación de la democracia. Y sin ese esfuerzo el proceso que arranca de la ley de reforma política y el referéndum sólo sería un paréntesis de libertad y democracia que las generaciones actuales no habrían sabido consolidar.